

Prensa Obrera

POR UN PARTIDO OBRERO



Jueves
18 de Junio
de 2020

Año XXXVII
Nº 1.598

\$40
www.po.org.ar
www.prensaobrero.com
prensaobrerapo@gmail.com

Bartolomé Mitre 2162
C1039AAB
Ciudad de Buenos Aires

Editorial
Invierno
caliente



MARIANO FERREYRA
LA LUCHA CONTINUA



Vicentin
S.A.I.C.



Allianz



BLACKROCK



Fidelity
INVESTMENTS



AJUSTAN AL PUEBLO,

RESCATAN A LOS ACREEDORES

Los recules sucesivos del gobierno frente a los acreedores de la deuda externa ya han significado el incremento de 10.000 millones de dólares en la propuesta de pago. Ahora siguen reclamando concesiones mayores.

Los 150 mil millones de deuda en pesos que vencen esta semana serán reemplazados por nuevos bonos en dólares. Otro aumento de la deuda que se reconoce impagable. Mientras nos mienten que la reducen.

El FMI ya ha pedido discutir el plan económico argentino. Y BlackRock, el mayor fondo de inversión, ha planteado que el cupón propuesto, atado al crecimiento del PBI, sea controlado por el organismo. Sería un novedoso mecanismo de dependencia colonial del FMI.

Semejante idilio con el FMI no es gratuito. Las paritarias están suspendidas. Se han

prorrogado por 60 días la reducción salarial que pactaron junto a la CGT y la UIA. Han anunciado el pago en cuotas del aguinaldo para los trabajadores del Estado. Le rebanaron la mitad a la movilidad jubilatoria de junio.

El salvataje de Vicentin tiene la misma lógica, aunque lo pinten de nacional y popular: rescatan a los acreedores y al grupo quebrado. El Estado se va hacer cargo de los 1.300 millones de dólares que deja como deuda la patronal vaciadora de la empresa.

El tema dividió al empresariado. Quieren el rescate para sus crecientes deudas corporativas, pero sin perder la plena disponibilidad de su manejo sobre las empresas.

Parte de la propia base del gobierno, en el Congreso y entre los gobernadores, opera

para que el resultado sea una participación del Estado que preserve a los accionistas privados y acreedores. Más endeudamiento.

Los trabajadores de la Algodonera de Vicentin, en el norte de Santa Fe, han ido a la huelga, han desoído una conciliación obligatoria y han ganado la calle.

La intervención del gobierno no les ha garantizado salarios ni puestos de trabajo. La patronal y el intendente de Cambiemos, tampoco.

Los trabajadores de todo el país estamos en la misma situación.

Frente a un gobierno que entrega nuestro salario, nuestros empleos y nuestra salud, extendamos las luchas y pongamos en pie una alternativa propia, que le dé una salida obrera a esta crisis.

Jornada nacional de lucha de organizaciones de jubilados

En defensa de la movilidad y los derechos jubilatorios

El 22 de junio, a las 11:30 horas, se realizará una acción de lucha autoconvocada por diversas organizaciones de jubilados de todo el país, entre las que están la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, nuestro Plenario de Trabajadores Jubilados, Jubilados Docentes Autoconvocados por el 82% móvil de Chaco, la Asociación de Jubilados Provinciales Autoconvocados de Córdoba, Asociación de Jubilados Norma Plá de Córdoba, la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, Jubilados de Izquierda, el Centro de Jubilados de ATE Neuquén, Comisión de Jubilados de Amsafe, entre otros, y estará presente el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.

La jornada es de tipo virtual y se desarrollará simultáneamente con la movilización convocada por la Coordinadora de Organizaciones de Jubilados en Lucha de Córdoba y la convocada en Rosario por parte de la Secretaría de Jubilaciones y la Comisión de Jubilados de Amsafe. Es decir que será una movilización física y virtual, mixta, según las provincias.

Se llevará a cabo en momentos en que se halla para su tratamiento la nueva postergación a la suspensión de la movilidad en el Congreso y que ha comenzado a reunirse la bicameral de Previsión Social que está abordando la reforma del cálculo de movilidad y las cajas provinciales.

La ley que suspende la movilidad hasta el año que viene, pondrá a prueba a todas las fuerzas políticas. No debe pasar. Si la suspenden por un DNU, hay que arrancar una ley que lo anule. Depende de nuestra lucha. Los diputados del Frente de Izquierda estarán al servicio de ella.

La suspensión de la movilidad, que viene desde diciembre de 2019 y que ahora se busca prorrogar, ha significado una re-



baja del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios. También es un paso decisivo hacia la liquidación de la jubilación como salario diferido, acercándola aún más a un subsidio a la vejez, en tanto se disocia cada día más del salario en actividad de cada trabajador. Ni hablar respecto de la canasta familiar, que en su versión básica, según la defensoría de la Tercera Edad, estuvo en 45.000 pesos en abril.

A la anulación del derecho adquirido de movilidad se agrega el plan de liquidación de las cajas provinciales, como ya ha ocurrido en Córdoba y pretenden hacerlo en Misiones, Buenos Aires, Santa Fe y en otras jurisdicciones.

Estas medidas, que afectan enormemente a los no cuidados "adultos mayores", forman parte de las discusiones y acuerdos con el FMI y los acreedores internacionales.

El gobierno de Fernández, apelando a los DNU, ha utilizado los fondos jubilatorios para subsidiar a los capitalistas a través de las ATP. El vaciamiento de la Anses se completa con la eximición de aportes patronales, los

despidos, suspensiones y el trabajo en negro.

Las trece cajas provinciales viven la misma suerte: constantes intentos de modificar los aportes, el cálculo del haber, la movilidad y la edad, junto con el manejo delictivo de los fondos para otros fines que interesan a los gobiernos provinciales.

A todas luces hay una continuidad con la política del gobierno de Macri y la última etapa del gobierno de Cristina Fernández en el sentido de unificar a la baja todo el sistema jubilatorio nacional.

La crisis de expansión del coronavirus en los geriátricos no es ajena al vaciamiento del Pami y demás obras sociales provinciales.

Kicillof, por su parte, ha resuelto usar los fondos de Ioma (obra social provincial de estatales, docentes y jubilados) para rescatar a las clínicas privadas.

La Jornada Nacional de Lucha de las Organizaciones de Jubilados es una protesta con los recursos de lucha que permite la cuarentena.

Los jubilados y sus organiza-

ciones, en forma autoconvocada vamos por:

- Defensa de la movilidad. Devolución del derecho adquirido.
- 82% móvil, en base al mejor sueldo en actividad.
- Mínima de \$45.020 equivalente a la Canasta Jubilatoria.
- Trabajo bajo convenio y en blanco de todos los trabajadores.
- Plan de viviendas para jubilados.
- Restitución de los fondos de Anses. Devolución de los bonos de deuda, reinstalación de los aportes patronales.
- Por la administración y control de trabajadores y jubilados de Anses, de las cajas provinciales y especiales y de Pami y obras sociales provinciales, por medio de directorios electos por los propios trabajadores y jubilados.
- No pago de la deuda externa.
- Impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas.
- Testeos masivos y sistemáticos a residentes y trabajadores de los geriátricos, por medidas de salud e higiene adecuadas y preventivas para evitar los contagios.

Nora Biaggio



GABRIEL SOLANO

A solo días del cambio de estación, ya nadie duda que el invierno que tendremos por delante será muy caliente en materia política, económica y sanitaria. Sucede que el gobierno recorre la mitad de su primer año de mandato acumulando una crisis que no logra cerrar. El apoyo popular masivo, casi unánime, que mostraban las encuestas hace semanas atrás, fue devorado por la bancarrota de fondo que recorre a la Argentina y que se ha agravado sensiblemente por el impacto de la cuarentena. En este cuadro, los anuncios oficiales sobre la empresa Vicentin constituyen un manotazo de ahogado de final incierto para el gobierno. Se pondrá a prueba la capacidad de arbitraje de los Fernández, que ensayan una nueva experiencia de un gobierno de tipo bonapartista muy peculiar, porque tiene como mínimo dos cabezas y por abajo una coalición muy heterogénea, que incluye a Massa y a los gobernadores pejetistas. La derecha, a su vez, golpeada por la derrota del macrismo y por la crisis que enfrentan a nivel internacional los Bolsonaro y Trump, busca levantar cabeza queriendo anclarse en el capital agrario y en sectores de la pequeña burguesía golpeada por la crisis. Los trabajadores, que están sufriendo los embates más duros de la bancarrota económica, tienen el gran desafío de superar el cerco armado por la burocracia sindical y salir a la lucha para defender sus puestos de trabajo, su salario y, dada la amenaza sanitaria, también su vida y la de su familia. En tanto, la precoz pero prolongada cuarentena empieza a crujir en el Amba en relación con la capacidad sanitaria de afrontar la escalada en cierto plazo, sin que se sepa a ciencia cierta siquiera cuántas camas críticas hay en el sistema privado, de amplio predominio, especialmente en la Capital.

Los bonistas contestan con el bolsillo

Es sabido que ni bien asumió Alberto Fernández estableció que su prioridad era cerrar el acuerdo de la deuda en virtual default. Originalmente, la fecha límite era fines de marzo, pero ya estamos a fines de junio y el acuerdo sigue sin alcanzarse. En el medio, el ministro Guzmán fue mejorando la propuesta para los bonistas -o sea, empeorándola para la Argentina. Los sucesivos recules del gobierno implicaron, según varios cálculos, unos 10.000 millones

Suscribite a

Prensa Obrera

.com | POR UN PARTIDO OBRERO

Invierno caliente

de dólares adicionales para los fondos de inversión. Sin embargo, estos mantienen su rechazo y van por más. A pocos días de la nueva fecha de cierre establecida, los desacuerdos se mantienen. El reclamo de los acreedores es claro: dejar de lado toda quita de capital, llevar los intereses anuales por encima del 3%, reducir a lo mínimo el período de gracia y adicionalmente obtener dos bonos, uno atado al crecimiento del PBI o las exportaciones, y otro que capitalice los intereses no devengados. Si le creemos al ministro Guzmán y a Alberto Fernández cuando dijeron que la propuesta original era la única 'sustentable', es claro que las modificaciones posteriores realizadas por el gobierno y, más aún, las nuevas exigencias de los bonistas llevarán a la Argentina a una nueva crisis en un plazo breve de tiempo. Con decir que las últimas propuestas se acercan al valor de mercado de los bonos.

Los fondos de inversión presionan fuerte porque tienen una caracterización: el gobierno quiere arreglar, Cristina Kirchner incluida. Entonces, saben que más temprano que tarde terminará cediendo a sus extorsiones. Cuentan para ello con la propia burguesía nacional, que le ha dicho a Alberto Fernández que debe evitar el default. En el mismo sentido se pronunció la burocracia sindical. Las fechas, además, juegan en contra del gobierno. Se acercan nuevos vencimientos y el 'default blando' podría dejar de ser tal si comienzan las presentaciones judiciales en la Corte de Nueva York.

Mientras tanto, se siguen acumulando los vencimientos en pesos. Esta misma semana, el gobierno debe pagar unos 150.000 millones de pesos por el vencimiento del Bopomo, que mayormente está en manos del fondo internacional Pimco. Como la tendencia natural es que esos pesos se vayan rápidamente al dólar, agravando la brecha cambiaria, el gobierno ahora anunció que emitirá deuda en dólares para reemplazar los vencimientos en pesos. En vez de desendeudamiento, tendremos más deuda, pero en vez de estar nominada en moneda nacional será en divisas. No faltó quien marcara el absurdo de un gobierno que quiere aplicar una quita a la deuda en dólares para luego anunciar nuevas emisiones en esa moneda.

FMI

Detrás de lo que parece un despiste, emerge una crisis que supera el instrumental usado por el gobierno. Las nuevas propuestas de deuda realizadas por los Fernández y Guzmán, y las peores condiciones que muy probablemente terminen aceptando en los próximos días, impondrán restricciones de fondo a la economía, en momentos donde la recesión es cada vez más fuerte. Como ya hemos señalado en estas páginas, la reducción del período de gracia tiene una finalidad económica estratégica: comprometer al gobierno a pagar deuda durante su mandato, que lo obligará a implementar una política económica ajustadora para garantizar dichos pagos. Después de todo, la amiga del Papa, Kristalina Georgieva, declaró que esperan discutir un



plan económico con la Argentina como parte de la reprogramación de pagos con el FMI que vencen en los próximos años. Sabiendo esto, BlackRock, de modo atrevido, propuso que el bono atado al PBI lo controle directamente el FMI para evitar adulteraciones de las estadísticas. ¿Patria, sí; colonia, no? El desembarco y monitoreo del FMI formó parte de la agenda de discusión en la teleconferencia desde la residencia presidencial de Olivos, que tuvo lugar entre el canciller argentino, Felipe Solá, y su par norteamericano, Mike Pompeo, en momentos en que se avanza a un arreglo en la renegociación de la deuda.

Sería injusto, de todos modos, que los acreedores no le reconozcan al gobierno su compromiso con el ajuste contra las masas. De hecho, ha suspendido las paritarias y no hay visos de nuevas convocatorias; ha impulsado la reducción del 25% de los salarios nominales abarcando incluso a trabajadores que están realizando actividades y ha prolongado su vigencia por 60 días más; suspendió la movilidad jubilatoria; ahora acaba de anunciar que pagará en cuotas el aguinaldo a trabajadores del Estado nacional, lo cual es una invitación a que hagan lo propio los capitalistas en sus empresas y los Estados provinciales y municipales. Que estos golpes durísimos a los trabajadores no alcancen para superar la bancarrota económica, no excusa al gobierno de su orientación política y social.

Vicentin

Es en este cuadro de crisis que el gobierno decidió la intervención de la empresa Vicentin y anunció el envío de un proyecto de expropiación. La decisión parece antes que nada una medida improvisada, fruto de que no avanzaron las negociaciones que se vinieron realizando en secreto durante estos meses entre funcionarios del gobierno nacional, de la provincia de Santa Fe, la propia empresa y sectores interesados en ingresar al negocio. En ese sentido, la medida constituye un fracaso del gobierno. El propio Alberto Fernández lo reconoció al repetir hasta el hartazgo que la intervención y eventual expropiación no forma parte de

ningún plan de nacionalizaciones, sino que es una medida aislada.

Si la intervención de Vicentin tiene todos los condimentos de una improvisación, los argumentos usados por el ala izquierda del kirchnerismo ya rayan con el delirio. La alusión a la "soberanía alimentaria" carece de toda seriedad, porque su plena satisfacción requiere establecer un monopolio del comercio exterior y la nacionalización de la gran propiedad agraria, así como de la cadena de industrialización y comercialización, algo que no se le pasa por la cabeza a nadie dentro del elenco gubernamental. La alusión a repetir el modelo YPF marca los límites insuperables del propio gobierno: YPF no sirvió para lograr ninguna soberanía energética, sino que fue el canal para la entrega de Vaca Muerta a Chevron. La propia YPF presiona de igual modo que el resto de las petroleras por los tarifazos a las naftas y por la obtención de subsidios del gobierno. YPF no solo ha sido 'testigo' sino la principal impulsora de esta política. No olvidemos que YPF funciona como una privada más, como una sociedad que cotiza en la Bolsa de Nueva York y, por lo tanto, expuesta a la incursión y dependiente del capital internacional. El modelo que se pregona está lejos de ser un antídoto contra el peligro de "extranjización" de la empresa.

Sin embargo, la aclaración no ha servido para lograr el apoyo de la burguesía que entrevé un peligro, ya que la quiebra de Vicentin está lejos de ser una excepción. La deuda corporativa ha ido en ascenso y las sucesivas devaluaciones han agravado el peso de estas sobre las empresas. La situación podría incluso agravarse de fracasar la negociación de la deuda del gobierno con los fondos de inversión, porque haría aún más difícil la refinanciación de esos pasivos. El gobierno no tiene condiciones de repetir la medida de Vicentin a otras empresas, porque carece de los recursos económicos mínimos. Ya nadie sabe de dónde sacará los 1.300 millones de dólares para hacer frente al pasivo de Vicentin, más el aporte de capital de trabajo que deberá hacer para asegurar el funcionamiento de

las plantas. Un rescate a los acreedores de las corporaciones capitalistas es inviable cuando Argentina no puede enfrentar la deuda de su propio Estado.

Estas contradicciones de fondo están llamadas a sacudir el escenario político en los próximos días. El gobierno se ha metido en un brete y no tiene asegurada aún la aprobación de un proyecto de expropiación en el Congreso. El propio Lavagna ha salido en contra y armó un proyecto propio que excluye la expropiación. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, sigue buscando viabilizar una alternativa de este tipo, distinta a la impulsada por el gobierno nacional. Resta por ver qué hacen los diputados que responden a Schiavetti, que podrían decidir sobre el final, según sea la realidad de fuerzas en ese momento. Viendo los permanentes recules con la deuda y con el proyecto de impuesto a los ricos, que nunca vio la luz, es probable que los Fernández terminen tomando ellos mismos la propuesta de Lavagna para buscar un compromiso, alegando que carecen de los votos. Para el gobierno sería una tormenta perfecta: una crisis con los bonistas y el capital agrario en simultáneo.

Por una acción independiente de los trabajadores

El desarrollo de esta crisis podría crear un escenario de polarización política entre variantes capitalistas. En esas circunstancias, el gobierno buscará presentarse ante los trabajadores como la expresión de la defensa de intereses populares en oposición a la oligarquía agraria y sus representantes políticos. Sería un recurso político para ocultar su entrega a los fondos de inversión pero, por sobre todo, el ajuste a los trabajadores que, como señalamos más arriba, avanza en todos los frentes, afectando los salarios, las jubilaciones, el aguinaldo, los puestos de trabajo y hasta la asistencia alimentaria.

Para los trabajadores, la vara básica con la que deben juzgar al gobierno es cómo afecta su política a la vida de las amplias masas de la población. Y en la medición debe entrar también el manejo de la crisis sanitaria, que ingresa ahora en la fase más comprometida por el crecimiento de los casos y la llegada del invierno. A pesar de la alerta de los especialistas que el sistema sanitario podría colapsar en las próximas semanas si no se toman medidas de aislamiento rigurosas, el gobierno se resiste a tomar medidas de este tipo por la presión de la clase capitalista.

Las luchas obreras que están en marcha, como la que protagonizaron los trabajadores de la algodónera de Vicentin en Reconquista, marcan un rumbo a seguir. La consigna del momento es multiplicar las luchas contra el ajuste en todos los terrenos, para que emerja una intervención independiente de la clase obrera. La entrega de la burocracia le plantea al activismo de la izquierda y combativo un amplio campo de acción. La jornada de lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo del pasado 16 de junio se inscribió en esta política para que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores.

Lxs obreros de Algodonera Avellaneda vs. el lobby sojero de Vicentin

Dos marchas, dos perspectivas

Desde el año 2011 no se producía un paro en Algodonera Avellaneda, propiedad del megagrupo empresarial Vicentin Saic. El 16, 500 obreras y obreros ganaron las calles de Reconquista -cabecera del departamento de General Obligado al norte de Santa Fe-, donde está radicada la empresa, marchando desde las puertas de la planta hasta el centro de la ciudad.

Están de paro desde el viernes 12 de junio y desde ese momento bloquean con un piquete disuasorio las puertas del portón de la fábrica, ganando a otros turnos y sectores a la medida de lucha, porque el sindicato abandonó esta lucha que ha sido tomada en sus manos por los delegados de sector. Reclaman principalmente salarios dignos: un trabajador con 31 años de antigüedad cobra 100 pesos la hora de trabajo más 10 pesos por antigüedad. A esta indignidad, se suma que la patronal retuvo y no pagó los bonos salariales cedidos por el gobierno al personal esencial que trabajó durante la cuarentena.

La algodonera del grupo Vicentin viene, sin embargo, de aumentar su producción, están trabajando con ritmos más intensos de trabajo que en el pasado, “produciendo al 300%”, como repiten lxs compañerxs. Es que en medio de la crisis algunos ganan y otros pierden, Vicentin siempre gana. La superexplotación laboral está en la base de la fortuna de este pulpo sojero. Esta intensificación de los ritmos de trabajo no ha tenido correlato con ninguna compensación salarial por productividad, mientras lxs trabajadores denuncian un aumento de las enfermedades laborales y la precarización laboral.

La lucha de clases detrás del destino de Vicentin

Como sabemos, las casualidades no existen, y el mismo día en que este colectivo obrero salía a luchar contra la explotación de la patronal Vicentin -en una medida que fue votada en asamblea hace varios días, luego de que se rechazó la conciliación obligatoria-, la familia propietaria del grupo intentó tapar el reclamo obrero dirigido contra ellos, organizando un raid mediático en los principales medios de la provincia y organizando una caravana de vehículos en la localidad vecina de Avellaneda “contra la explotación”.

Es sabido que el objetivo declarado del gobierno es proceder a un rescate de los acreedores sin afectar los intereses capitalistas del grupo que



dirigen los Padoán-Nardelli (ver editorial). Esto lo aclaró la diputada del Frente Progresista, María Laura Corgniali, que se apersonó en el piquete de las puertas de la planta de Algodonera Avellaneda y en nombre del subinterventor del gobierno nacional aclaró que esa empresa no forma parte de la rama intervenida y por eso el gobierno no puede hacer nada respecto del reclamo obrero. El dato es, a primera vista, falso, ya que la algodonera figura como parte del grupo Vicentin Saic. Políticamente, muestra un gobierno de espaldas a los reclamos obreros más elementales.

Mientras que el gobierno se declara prescindente de este conflicto, en lugar de apoyarse en el colectivo obrero para avanzar contra una familia de oligarcas que defaultearon a productores, trabajadores y al propio Estado, los titulares de la empresa han sacado toda su artillería y su poder patrimonial contra la tibia medida del gobierno, dándose el lujo de mostrar su pertenencia a la burguesía “nacional”. Héctor Vicentin, hijo de uno de los fundadores de la empresa y exdirector de la compañía, dijo en Radio 2 que: “Durante el gobierno de Cristina no dijeron nada cuando capitales chinos compraron el 100% de una cerealera como Cofco. No entiendo ahora por qué apuntan a la extranjerización”. Se refiere a la compra de la exNidera, con la que este pulpo chino se posicionó junto con Cargill y Dreyfus, entre las principales agroexportadoras del país.

Fracasó la audiencia en el Ministerio de Trabajo

La prostración más clara del gobierno de Santa Fe a los intereses de los Vicentin lo demuestra lo sucedido el 16 de junio en la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la provincia, donde desde el Estado

desecharon todas y cada una de las reclamaciones de un extenso pliego obrero, que iba del salario a las condiciones de trabajo. Allí le dijeron que todo esto “son condiciones de convenio ya cerradas en paritarias”. Omar Perotti y especialmente su ministro de Producción, Constanmagna, se han colocado como mediadores del conflicto en favor de los Vicentin y sobre todo de la “seguridad jurídica” que reclaman las sojeras, que tienen en Santa Fe una plataforma de explotación privilegiada.

La lucha de las trabajadoras y trabajadores textiles de Algodonera Avellaneda es parte de conflictos y reacciones en diferentes sectores de trabajadores que van surgiendo en varios puntos del país en defensa de sus salarios, los puestos de trabajo y las condiciones sanitarias en el marco de la pandemia. El contraste es la parálisis de la burocracia sindical de todos los pelajes.

La salida de fondo al conflicto de todas las empresas del grupo Vicentin está en manos de los trabajadores textiles, estibadores, aceiteros, algodonereros, de la carne y todos los sectores obreros que trabajan para esta empresa y hoy no tienen garantía alguna respecto de su situación laboral.

Oponiendo a la incertidumbre, convoquemos asambleas obreras que debatan un pliego en defensa de los puestos de trabajo y exigiendo un salario acorde al costo de vida.

Estatización sin pago de todo el grupo Vicentin. Por la recuperación del complejo agroexportador en manos de sus trabajadores. Nacionalización de los puertos y el comercio exterior. No al pago de la deuda. Que la crisis la paguen los Padoán-Nardelli y la clase capitalista.

Carla Deiana

La jornada del sindicalismo combativo irrumpió en todo el país

De Salta a Tierra del Fuego, el Plenario del Sindicalismo Combativo planteó la agenda de la clase obrera y del conjunto de las luchas en curso en medio del plan de guerra del gobierno y las patronales contra los trabajadores, rubricado con el “Pacto Social” en tiempos de pandemia que es el acuerdo UIA-CGT-gobierno.

Bajo la consigna “Sin salario, sin trabajo, sin salud y sin alimentos no hay cuarentena”, sindicatos, comisiones internas, seccionales, delegados antiburocráticos y organizaciones piqueteras combativas de todo el país plantearon una salida independiente de las patronales, los gobiernos nacional y provinciales y de la burocracia sindical de la CGT y de la CTA, cuya integración al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ha sido fundamental para hacer pasar centenares de miles de despidos, suspensiones, rebajas del salario en casi un 30 por ciento y la profundización del hambre, especialmente por la negativa a otorgar un seguro al desocupado y por vaciar de alimentos los comedores populares.

Fue una acción de trabajadores ocupados y desocupados, marca de nacimiento del PSC, conformado por sectores sindicales y organizaciones piqueteras no integradas al gobierno de los Fernández, como el Polo Obrero y el Frente Piquetero, que integra con otras organizaciones combativas de desocupados.

En el Amba, el escenario fue la realización de un acto-conferencia de prensa en el Obelisco, en la cual se describieron todas y cada una de las acciones realizadas en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta, Misiones, Chaco, Santa Fe (Rosario), Entre Ríos, Catamarca, Chubut, además de ciudades y localidades como La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. La movili-



ción del Polo Obrero fue protagonista en todas las acciones en todos estos puntos del país.

La jornada estuvo presidida por un acto central con distanciamiento, en pleno centro porteño, donde los principales referentes del Plenario del Sindicalismo Combativo tomaron la palabra y denunciaron el pacto antibrodero de la Unión Industrial Argentina, el gobierno y la CGT, en medio de la crisis de la pandemia por coronavirus y el agravamiento de las condiciones vida y trabajo de los trabajadores en todo el país. Tomaron la palabra Alejandro Crespo, secretario general del Sutna (neumático) y miembro de la Coordinadora Sindical Clasista (CSC), quien abrió el acto; el Frente de Lucha Piquetero, que integran el Polo Obrero y otras organizaciones, a través de la compañera Maribel, del MTR; Guillermo Pacagnini, secretario general de la Cicop; Rubén Soler, secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, que hizo el cierre de la actividad. También diri-

gieron su mensaje Noelia, trabajadora de La Nirva, en conflicto, y Claudio Dellecarbonara, de la directiva de la AGTSyP e integrante del MAC, que adhirió a la iniciativa del PSC.

Destacada representación obrera

Además de los sindicatos ya mencionados, fueron convocantes o parte de la jornada las CTA-A de Mendoza y Santa Cruz, dirigidas por la CSC-PO, la AGD-UBA, Ademys-Caba, Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados de Mendoza, el Sindicato Ceramista de Neuquén, el sindicato cordobés de la salud, UTS; los Suteba multicolores de La Matanza, Escobar, Ensenada, Tigre, Marcos Paz y General Madariaga, Amsafe-Rosario, Adosac-Santa Cruz; minorías de Agmer-Entre Ríos, Aten-Neuquén, Sute-Mendoza; los municipales de Jesús María; comisiones internas combativas del Inti y de ATE-Educación La Plata; la gráfica Morvillo; la textil Textilana; ATE-Agroindustria-La Plata, delegados de la Alimentación

Daniel Sierra

Se realizó la jornada nacional de lucha contra el hambre

En el Obelisco y en casi todo el país

El jueves 11, las organizaciones sociales y piqueteras se vieron obligadas a salir nuevamente a las calles tras 80 días de cuarentena, denunciando que las condiciones de vida se han agravado para las familias obreras por falta del suministro de alimentos, insumos sanitarios, testeos en los barrios carenciados

y un ingreso económico suficiente para poder paliar los efectos de la crisis. Las concentraciones comenzaron en horas de la mañana, cuando cientos de desocupados y cooperativistas se congregaron en el Obelisco porteño y en otros 30 puntos distribuidos por todo el país. No es la primera vez que las or-

ganizaciones piqueteras denuncian las condiciones en las que millones de trabajadores desocupados y sus familias enfrentan durante la cuarentena. El Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero ya han protagonizado otras acciones de este carácter, obteniendo que el gobierno nacional reciba los reclamos

Despliegue de una corriente basada en el frente único de clase

“El sindicalismo clasista realizará una jornada de lucha en todos los puntos del país”, tituló el día previo el portal sindical “Infogremiales”, una noticia que contrastaba con la connivencia de las informaciones del conjunto de las direcciones sindicales que pueblan las páginas de ese medio. Efectivamente y paradójicamente, en medio de la pandemia y las restricciones para una movilización masiva, la acción del 16 del PSC fue la más extendida nacionalmente y con una participación mayor de nuevos sectores en lucha. El sindicalismo combativo se abre paso como un polo aglutinador de los sectores en lucha y del activismo que, día a día, choca con el paredón de las burocracias sindicales de todos los signos. El programa de independencia política de los gobiernos, de la burocracia sindical y de las patronales, su organización en base a los sindicatos, seccionales, comisiones internas y cuerpos de delegados ganados por los sectores clasistas y antiburocráticos, y el método del frente único (contracara del faccionalismo estéril) son los pivotes sobre los que se asienta el progreso del PSC.

Trabajadores de Bridgestone paran la fábrica por medidas sanitarias ante el Covid-19

Al cierre de esta edición, se desarrolla un contundente paro en la fábrica Bridgestone (Lomas de Zamora, Llavallol), convocado por el Sutna. Luego del exitoso paro general realizado el viernes 12, la patronal de Bridgestone continuó incumpliendo las normas más elementales de seguridad frente a la pandemia. Saludamos esta acción convocada por el Sutna, que contrasta con la connivencia de la burocracia sindical con las patronales frente al riesgo que corren los trabajadores de todo el país. Llamamos a darle la más amplia difusión al paro y redoblar el apoyo a los compañeros del Neumático, que se encuentran a la vanguardia de la lucha en defensa de los intereses de los trabajadores.

A continuación publicamos el comunicado del Sutna.

Paro total en Bridgestone por Covid-19

Ante incumplimiento de las más básicas medidas de prevención y la confirmación de positivo de un caso estrecho al que se lo mantenía trabajando.

En estos momentos se desarrolla un paro general de actividades por 24 horas, convocado por nuestro sindicato en la fábrica Bridgestone, debido al incumplimiento por parte de esta empresa de las medidas sanitarias más elementales frente a la pandemia que estamos viviendo. La conducta irresponsable y decididamente lesiva de la salud de los trabajadores por parte de esta multinacional debe ser repudiada por todos los compañeros del Neumático y toda la población, ya que afecta la salud de todos.

Concretamente, esta patronal se negó al cumplimiento de la



cuarentena de los casos estrechos de un compañero cuyo test resultó positivo. A pesar de que los propios compañeros manifestaban ser casos estrechos, los reclamos de este sindicato e incluso las indicaciones de la epidemióloga del Ministerio de Salud de Lomas de Zamora (distrito donde se encuentra la planta), la patronal mantuvo su negativa a dar el correspondiente aislamiento. Uno de estos compañeros, luego de continuar trabajando obligado por la empresa, comenzó con síntomas propios de Covid-19, fue testeado y en el día de hoy se le comunicó el resultado positivo del hisopado. Ante la negativa absoluta por parte de la patronal de Bridgestone a dar respuesta positiva alguna, sumada a esta gravísima situación, este sindicato ha llamado a un paro total de actividades por 24 horas.

El viernes pasado, el Sutna realizó un paro de actividades en todas las fábricas de la provincia

de Buenos Aires en reclamo de mejoras en las condiciones de seguridad y prevención ante la pandemia. En este sentido, hemos puesto a disposición de las empresas un protocolo específico para las plantas del neumático, elaborado por el sindicato nacional junto con trabajadores y profesionales sanitarios.

Sin embargo, esta patronal no ha tenido en cuenta estas exigencias y ni siquiera cumple con las reglamentaciones más básicas. Llamamos a darle la mayor difusión a este conflicto, desatado por el incumplimiento de las reglamentaciones más elementales establecidas por las autoridades nacionales y exigimos la inmediata discusión y cumplimiento de las medidas reclamadas por los trabajadores, como la separación de los turnos, el aislamiento y testeado de todos los casos estrechos y la desinfección de los sectores afectados.

Corresponsal

populares pero, sin embargo, a la fecha no se ha constatado el cumplimiento de esos compromisos, que implicarían un refuerzo de la asistencia alimentaria, la provisión de elementos de higienización y desinfección, así como otras medidas de emergencia para atender los reclamos urgentes del sector más vulnerable de la población trabajadora.

La jornada del 16 tuvo como aditamento la participación de todas las organizaciones sociales, con la excepción de los grupos integrados al gobierno y al Estado, que conforman el denominado “Triunvirato San Cayetano”. Síntoma de que la

crisis es de tal magnitud que ha colocado a la mayoría de las organizaciones ante la necesidad de actuar para obtener una respuesta del Estado, en momentos en los que el gobierno financia a las patronales por medio de subsidios millonarios, como los ATP, y rescata a empresarios en quiebra, como es el caso de Vicentin.

Desde las organizaciones piqueteras señalan que el Ingreso Familiar de Emergencia no cumple el papel anunciado por el gobierno, ya que en lo que va de la cuarentena se percibió una sola vez, por la módica suma de 10.000 pesos y de su cobro quedaron exceptuados millones de

desocupados, incluso quienes ya perciben un magro programa social de 8.500 pesos.

También denunciaron la situación crítica que se vive en las villas, asentamientos y barrios carenciados, donde han muerto varios compañeros y compañeras a causa del contagio de Covid-19.

Las actividades en el interior del país también manifestaron la responsabilidad de los gobernadores y de las intendencias, desde donde se desoyen los reclamos populares y donde se actúa en contra de los intereses obreros y populares.

Marcelo Mache

Empezó la Campaña Financiera

Sumar aportes para la lucha y la organización

Comenzaron a ingresar los primeros aportes de la Campaña Financiera, de la mano de la planificación que está realizando toda la militancia en todo el país. Esta planificación integra a decenas de trabajadores de diversos gremios, de la juventud y del movimiento de mujeres.

Después de la enorme jornada de lucha del sindicalismo combativo del 16, que demostró la organización y la disposición de lucha del conjunto de los trabajadores a buscar una salida a la enorme carestía que se viene desarrollando en la cuarentena, el debate está empezando a dar sus frutos.

No solo porque empezaron a ingresar los primeros aportes, sino porque la planificación

que se está realizando denota la audacia necesaria para sortear todos los problemas que se nos plantean en este momento, en el sostenimiento de las luchas y la acción política de nuestra organización. En Córdoba, por ejemplo, la planificación incluye una gran proporción de los trabajadores municipales que han salido a la lucha, de los trabajadores de la salud, de los de Luz y Fuerza y del transporte. En Neuquén, el debate comenzó con los trabajadores de la salud, los petroleros y mineros, y los docentes de Aten. Son cientos los trabajadores que queremos sumar a dar su aporte a la campaña y para ello se han planificado visitas presenciales y citas virtuales.

En la Ciudad de Buenos Ai-



res, la planificación la Campaña Financiera ya se discute en los sectores de salud que se movilizaron en la última semana y fueron parte de la jornada del 16, entre los trabajadores del subte y aeronáuticos. Entre los docentes de todos los niveles y estatales ya hay algunos compromisos y citas virtuales que auguran una excelente recepción general.

También en el Gran Buenos Aires se empezó a discutir la campaña entre los trabajadores del Neumático, en medio de la lucha entre los paros y asambleas que están desarrollando, y los

gráficos, que tienen una importante planificación para abordar al activismo de varias fábricas.

Jornada del 9 de Julio

En casi la totalidad del país, salvo en el área metropolitana de la Ciudad y Gran Buenos Aires (Amba), ya se están organizando actividades para el feriado del 9 de Julio. Locros, empanadadas y choricadas para sumar a la Campaña Financiera. Los barrios y los locales que están funcionando en las provincias realizarán ese día una jornada nacional que servirá

para la recolección de fondos, sumando a las relaciones del Polo Obrero y de diferentes sectores obreros. Ese mismo día planificaremos, en el resto del país, citas virtuales y debates puntuales, ya que debido a las restricciones de la cuarentena no se podrán hacer actividades.

Los debates y planes que se están desarrollando exponen grandes posibilidades en esta campaña y la gran conciencia en un activismo que lucha y busca organizarse. ¡Sumate compañero!

Emiliano Fara

Mientras crecen todas las necesidades sociales en el marco de la pandemia y la miseria en los barrios se multiplica, sin respuestas del gobierno (en tres meses, sólo el pago de una cuota del IFE de 10.000 pesos), el proyecto del oficialismo de impuesto a las grandes rentas y fortunas sigue sin aparecer. El gobierno ha puesto todas las fichas a la renegociación de la deuda externa, incompatible con una medida que afecte a la clase capitalista.

En contraposición con esta parálisis, la campaña del Partido Obrero en los sindicatos, lugares de trabajo y estudio en apoyo al proyecto presentado por el Frente de Izquierda y los Trabajadores continúa. El proyecto presentado con la firma de Romina del Plá plantea un impuesto extraordinario y progresivo a las grandes rentas, fortunas, a la banca y a todo el gran capital. Tiene el objetivo de recaudar 15.000 millones de dólares para volcarlos a las necesidades urgentes de la población trabajadora.

Entre los sindicatos docentes, junto al cuerpo de delegados del Suteba Matanza y la asamblea de Ademys, se pronunció, por ejemplo, la comisión directiva de Aten Zapala

Impuesto a las grandes fortunas: nuevos pronunciamientos



(Neuquén). Entre los docentes de todo el país se sumaron cientos de pronunciamientos.

En Neuquén, además de una importante campaña entre los docentes, se han pronunciado ceramistas, petroleros, mineros, trabajadores de la Clínica Central C6 y otros sectores en lucha.

La UJS también está impulsando masivamente el pronunciamiento entre los estudiantes. En Psicología, por ejemplo, se sumaron más de 30 nuevas firmas en apoyo al proyecto. Lo mismo entre los terciarios, donde se recogen importantes apoyos.

En Salta, además de la campaña nacional, tiene una fuerte repercusión el proyecto de Claudio del Plá. El kirchnerismo en la provincia está integrado totalmente al proyecto de Sáenz, y no dice una palabra sobre el tema. El proyecto de Claudio del Plá apunta, entre otros, a los propie-

tarios de más de 5.000 hectáreas o de patrimonios mayores a 100 millones de pesos. Se trata de las aproximadamente 150 familias de la oligarquía salteña, que han manejado la provincia a través de los sucesivos gobiernos, que además las beneficiaron con otorgamientos de tierras públicas y todo tipo de concesiones.

En el Chaco, el proyecto de Aurelio Díaz aporta una vía de salida para la crisis dramática que está viviendo la provincia. Mientras se disparan los casos de Covid 19, la tasa de contagios en el personal de salud es récord, porque no hay ni siquiera para insumos básicos. El hambre avanza en los barrios y las organizaciones populares denuncian que se retacea la entrega de mercadería para los comedores populares. Sin embargo, en una situación donde el impuesto a las grandes fortunas debería ser materia obligada de tratamiento legislativo, tanto el PJ como la UCR se niegan a tratarlo en la Cámara de Diputados.

En todo el país, la necesidad de un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas está en el orden del día. Impulsemos la campaña por el proyecto del FIT.

Juan García

ESTADOS UNIDOS-CHINA

Entre la guerra fría y la guerra caliente

La tensión entre Estados Unidos y China va en aumento. La presencia de tres portaviones de Estados Unidos en el Pacífico ha provocado alarma en China. Se trata del mayor despliegue militar estadounidense en la región desde 2017, cuando el entonces recién asumido presidente Donald Trump encabezó el enfrentamiento de su país con Corea del Norte por el programa de armas nucleares, diseñado por el régimen de Pyongyang.

Cada uno de los portaviones que motivan el actual conflicto es una mole de 100 mil toneladas, con capacidad para transportar más de 60 aviones. Como una forma de respuesta para demostrar su poderío, las autoridades de Pekín advirtieron que China podría realizar maniobras de simulacro y aseguraron que la fuerza militar cuenta con armas de destrucción de portaviones, como los misiles balísticos antibuque DF-21D y DF-26.

Esto coincide con la reactivación de otro foco de tensiones entre China e India en la frontera en los altos del Himalaya. El enfrentamiento que tuvo como saldo tres militares indios muertos, sería el primer incidente fronterizo con muertos entre las dos potencias en más de cuatro décadas. La cantidad de víctimas se estima muy superior, incluidos del lado chino. Esto viene de la mano de un reforzamiento del despliegue militar de ambos bandos. El enfrentamiento surge en el marco de una antigua disputa por el territorio fronterizo en Cachemira, una zona conflictiva que, a su turno, ya viene siendo blanco de conflictos y guerras entre India y Paquistán, el tercero en discordia. Pero más allá de ello, no se nos puede escapar que como telón de fondo está la escalada de tensiones entre Pekín y Washington, pues el régimen indio viene oficiando como una de los principales aliados de Estados Unidos en el continente asiático. Como contrapartida, Paquistán, su rival histórico en la región, se ha recostado sobre China. Lo cierto es que Paquistán ha permitido que se abra paso por su territorio la "ruta de la seda", el mega-emprendimiento por el cual China pretende tener una vía de circulación de sus productos hacia Asia y Europa.

La presencia de la flota norteamericana está relacionada también con el control del mar de China Meridional, donde hay zonas cuya soberanía Pekín se disputa con otros países. El gobierno chino reclama como propio casi la totalidad del Mar de China Meridional y ha construido en la disputada zona desde ciudades a pistas aéreas o instalaciones turísticas o de potencial uso militar.



Portaviones estadounidense USS Ronald Reagan, rodeado de buques chinos, en septiembre de 2019

Consecuentemente con ello, la Casa Blanca viene agitando las aguas contra el expansionismo chino. En la misma onda, Washington ha empezado a insinuar la posibilidad de reconocer a Taiwán como nación independiente -considerado por Pekín como una provocación-, dando marcha atrás con los acuerdos establecidos que reconocían a la isla como parte de China Continental.

Las fricciones entre Estados Unidos y China se han exacerbado notablemente en medio de la pandemia del coronavirus. Durante los últimos meses, Trump no ha ahorrado acusaciones contra el régimen chino, a quien responsabiliza por el ocultamiento del brote y de su posterior propagación por el planeta.

Lo que está en juego

Esta nueva escalada bélica tiene mucho que ver con su frente interno, donde Trump se encuentra cada vez más acorralado, en medio de la rebelión desatada como consecuencia del asesinato de George Floyd. No es la primera vez que el magnate saca de la galera alguna iniciativa en el plano internacional y de exhibir un logro y liderazgo en la política exterior que compense el aislamiento progresivo que viene sufriendo. De todos modos, hasta ahora el balance en la materia no le ha sido muy favorable, como se ve en el empantanamiento en Medio Oriente, Afganistán y su fallido acercamiento con el régimen norteamericano.

No se nos puede escapar que la demagogia nacionalista y la ofensiva militar son funcionales a la tentativa por avanzar en un orden represivo y policial, y de mayor regimentación política interna que hoy viene siendo desafiada en las protestas que se replican en todo el país. Todo indicaría

que hoy esta tentativa no pasa de una expresión de deseos condenada al fracaso.

Tampoco podemos perder de vista que la escalada obedece a un objetivo estratégico que es someter a China y al ex espacio soviético, y preservar su liderazgo y supremacía que hoy está en declinación. El capitalismo americano viene atravesando una decadencia como potencia, como se observa en el retroceso en el lugar que ocupa en la industria y el comercio mundial. Esto se ha potenciado aún más con la bancarrota capitalista, que marcha a una depresión global agravada por la pandemia. La guerra comercial no sólo busca revertir un desequilibrio en el intercambio comercial sino cortar de cuajo la producción y competencia china en la industria de punta.

Las crecientes represalias que sostiene sobre la empresa china Huawei, una de las tecnológicas líderes, se explica por ese motivo. Las medidas que el gobierno de Donald Trump impuso el año pasado a dicha compañía fueron reforzadas en mayo con una nueva limitación que, según algunos analistas, puede poner en peligro el futuro de la empresa.

El departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que exigirá que los fabricantes extranjeros de chips y semiconductores que usen software o tecnología estadounidense para fabricar productos que venden luego a Huawei deban solicitar antes una licencia para hacerlo. Para sortear las medidas anteriores aprobadas por Washington, la empresa china estaba recurriendo a compañías no estadounidenses para obtener los componentes que Washington le negaba. "Debemos cambiar nuestras reglas, explotadas por Huawei y HiSilicon -su filial de semiconductores- para impedir

que la tecnología americana sirva a actividades malignas, contrarias a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y su política exterior", dijo el secretario de Comercio de Estados Unidos, William Ross, al justificar la nueva restricción. Esto pone de relieve, a su vez, la distancia que aún separa a China de las principales potencias. El atraso en materia de chips y semiconductores, según algunos analistas, sería de diez años, lo cual da cuenta de su dependencia tecnológica del gigante asiático.

La ofensiva va más lejos. La aspiración última del imperialismo mundial, en primer lugar estadounidense, es superar el impasse capitalista que ha pasado a tener dimensiones sin precedentes, por medio de la colonización del gigante asiático y el ex espacio soviético, completando el proceso de restauración capitalista hoy inconcluso, lo cual implica confinarla un status semicolonial. Esto sólo se puede imponer por la fuerza.

China

China está lejos de estar inmune a este escenario. Antes de estallar el coronavirus, venía sufriendo una brusca desaceleración, lo cual se ha agravado con la pandemia. Estamos frente a un desempleo creciente en medio de una amenaza de quiebras que el régimen chino no está en condiciones de evitar. El Estado chino no cuenta con los recursos como los que apeló en el pasado. El endeudamiento público y privado hoy representa casi tres veces el PBI y esa inyección de recursos no ha sido suficiente para devolver a la economía a su dinamismo. Este panorama amenaza echar leña al fuego al descontento que ya viene abriéndose paso a través de un crecimiento de la conflictividad laboral.

Esto ha acentuado las contradicciones de la burocracia dirigente china, que oscila entre medidas favorables a una mayor apertura económica, por un lado, y recurrir al intervencionismo estatal para pilotear un descalabro económico y evitar que la situación social se desmadre, por el otro.

El conflicto desatado en Hong Kong es un indicador de este proceso, pues pone al rojo vivo que cada vez se hace más incompatible el principio de "un país, dos sistemas". La Asamblea Popular Nacional, el órgano legislativo máximo del régimen chino, viene de aprobar una ley de seguridad que refuerza a las atribuciones represivas del Estado en ese territorio semi-autónomo. La medida está dirigida, en primer lugar, contra los movimientos de protesta que vienen desafiando la autoridad a Pekín y ha dado lugar a movilizaciones multitudinarias, que rechazan la ofensiva regresiva y reclaman mayor autonomía política, y en rechazo del gobierno local de Carrie Lam, considerada como una simple extensión del gobierno chino.

La preocupación de Pekín no son sólo las protestas en Hong Kong, sino su impacto en el continente, en momentos en que la pandemia y sus consecuencias económicas agudizan el disconformismo popular. Estados Unidos ha aprovechado para meter su cola y no se ha privado de utilizar como una arma más en la guerra comercial en curso la resolución de quitarle a Hong Kong el estatus de "nación más favorecida" (que, entre otros ítems, otorga beneficios arancelarios), apostando a golpear a la burocracia y los capitalistas chinos, que usan a la isla como intermediaria de negocios. Es un arma de doble filo, que podría lesionar intereses norteamericanos que operan en el lugar (ver nota "Hong Kong en la mira", *prensaobrera.com*, 31 de mayo).

Hombres de confianza y de consulta del establishment ya han empezado a advertir que la "guerra fría" que viene abriéndose paso entre Estados Unidos y China podría transformarse en "guerra caliente", un eufemismo para hablar de un conflicto bélico (ver "La economía mundial que se viene", *PO* N° 1.597, 11 de junio). No olvidemos que depresiones anteriores condujeron a la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero también a crisis y levantamientos revolucionarios. La guerra no es un accidente, al igual que la revolución, son dos manifestaciones extremas del estallido de las contradicciones irreprimibles e insuperables del orden social vigente.

Pablo Heller

Trump, ¿el nuevo abanderado de las reformas policiales?

En un bandazo, el presidente yanqui decretó varias de las propuestas parlamentarias propuestas por su oposición demócrata

La rebelión en Estados Unidos se está acercando a un mes de desarrollo sin que sus clases dominantes logren recuperar el control de la situación.

La represión ha sido cruenta, con once muertos confirmados, cientos de heridos y casi 10 mil arrestados en el mes a lo largo del país. El reciente asesinato de Rayshard Brooks en Atlanta volvió a hacer recrudescer los choques. En el sur de California se producen manifestaciones exigiendo el esclarecimiento de las muertes de dos trabajadores negros que han aparecido muertos, colgando de árboles en ciudades de la zona. En Seattle se mantiene la zona de seis manzanas controladas por manifestantes alrededor de la jefatura policial.

La rebelión ha hecho indisoluble la realidad de la violencia policial, así como la orientación racista y de opresión de clase que ésta tiene. Un promedio de mil civiles son asesinados cada año por la policía. El asesinato policial es la sexta causa de muerte más común de jóvenes negros. Casi la totalidad de los asesinados están bajo la línea de la pobreza.

La policía yanqui efectúa 10 millones de arrestos anuales. Es, por lejos, el país con una mayor parte de su población encarcelada. La cantidad de presos se ha quintuplicado desde los años '70, marcando una enorme militarización de la sociedad, dirigida casi exclusivamente a la clase trabajadora. Los negros son los más condenados por crímenes comunes y reciben condenas más largas, lo cual los lleva a componer un tercio de la población carcelaria, mientras son un 13% de la población general.

La impunidad también es enorme. Según datos de mappingpoliceviolence.org, de 7.663 casos de civiles muertos por fuerzas policiales en Estados Unidos entre 2013-2019, solo en 95 casos hubo juicios y en 48 casos, condenas. Los sindicatos policiales son un enorme entramado de influencia política y económica, que ha operado sistemáticamente para defender estas condiciones de impunidad.

Es contra este enorme complejo que está dirigida la revuelta. La expresión local del aparato de dominación imperialista que patrulla el mundo entero.

¿Trump reformador?

Trump ha constatado que el enfrentamiento directo de la rebelión lo había llevado al aislamiento extremo. Luego de su desautorización por el Pentágono, el ex presidente George W. Bush ha rechazado apoyar a Trump en noviembre y el ex candidato Mitt Romney ha marchado en su estado con las banderas de Black Lives Matter. Enfrentado a esta situación, ha decidido operar un cambio de ángulo que parte de su gabinete venía promoviendo.

Una semana después de que el bloque demócrata en el Congreso presentara un moderado paquete de reformas policiales para tratar de usufructuar el movimiento en términos electorales y, al mismo tiempo, demarcarse de las demandas que el movimiento efectivamente plantea, Trump decidió emitir un decreto tomando varios de los puntos propuestos por sus opositores, primereando el debate en el Congreso.

El decreto dispone limitar el envío de fondos federales a departamentos locales que no prohíban el *chokehold* (estrangulamiento), a no ser que el oficial declare que su vida está en peligro; que den entrenamiento en tácticas de resolver conflictos de manera no violenta. Crea también un registro de policías violentos. El retaceo condicionado de fondos fue la propuesta con la que el candidato demócrata Joe Biden viene paseando por los medios y el registro fue propuesto por la senadora Kamala Harris, a quien muchos mencionan como su candidata a vice. El decreto también propone la creación de equipos interdisciplinarios para responder a casos donde las denuncias estén vinculadas con problemas de salud mental, drogadicción y gente sin techo, otra propuesta que los reformadores "progresistas" vienen planteando estos días.

El proyecto demócrata contiene algunos puntos más. Al igual que el proyecto parlamentario republicano, plantea la portación obligatoria de cámaras durante los procedimientos policiales. Restringe el uso de allanamientos forzosos (como el que se usó en la operación donde se asesinó a Breonna Taylor). Restringe, pero no anula, la entrega de armamento militar a las fuerzas, que funcionó bajo Obama y

adquirió proporciones enormes con Trump. Propone modificar la base para una condena por abusos policiales a los casos donde deben ser procesados los oficiales que violan derechos constitucionales a "sabiendas", sino los que lo hacen por "desprecio temerario". Modifica, pero no anula, las condiciones de la inmunidad calificada, una doctrina legal que protege a los oficiales policiales de ser llevados a juicio por sus actos en el desempeño de sus tareas. Sin embargo, los republicanos han declarado a este punto como inaceptable. La Corte Suprema votó contra revisar esta doctrina en sus fallos en una reunión esta semana.

Biden no sólo se ha opuesto al planteo de desfinanciamiento, sino que propone un incremento de 300 millones de dólares al presupuesto policial. De hecho, en el debate presupuestario que se viene en las semanas siguientes, es el Partido Demócrata el que defenderá el presupuesto policial y la posibilidad de incrementarlo, frente a planteos de recortes fiscales en esta y otras áreas que traerán los republicanos.

Trump se ha apoyado en el compromiso extremo del establishment demócrata con el sistema represivo para mostrar que está dispuesto a emitir reformas muy parecidas a las que ellos proponen. Trump no se ha transformado en un reformador, sino que comparte con sus opositores la defensa del *status quo*, de la capacidad represiva del Estado y de limitar las reformas al nivel más cosmético posible.

El impacto de la rebelión también ha llevado a una multitud de disposiciones locales de orden diverso. Desde condenas por "estrangulamiento agravado"; a la creación de oficinas de investigación sobre muertes a manos de la policía; requerimientos a las cortes a que publiquen datos raciales y demográficos sobre sus condenados por crímenes menores; el requerimiento de uso de cámaras por los policías; publicar los legajos disciplinarios de la policía; la prohibición de contratar policías con historias de faltas previas; reducciones presupuestarias a las policías locales, con un compromiso de girar esos fondos para proyectos en comunidades pobres o de color; la prohibición del uso de

gas lacrimógeno; contratar equipos profesionales no armados para atender denuncias que no impliquen peligro inmediato.

El caso más extremo es el anuncio de que la mayoría del Concejo Municipal de Minneapolis dice haber resuelto la disolución del departamento policial, que sigue funcionando, mientras se ha dado un año de transición para discutir cómo debe ser reemplazada.

Desfinanciar, abolir

Existe una enorme confusión en los medios de comunicación, generada intencionalmente, alrededor del alcance de las consignas que se levantan en el movimiento. El reclamo de abolición de la policía y las prisiones ha querido ser reemplazado por el planteo de desfinanciar, sostenido por la izquierda de los demócratas y parte del movimiento de lucha que, a su vez, pretende ser reemplazado por la dirección de su partido por "invertir mejor en seguridad".

La senadora Kamala Harris ha dicho que apoya el desfinanciamiento, en tanto se entienda como redirigir fondos a otros programas que mejoren la seguridad. La "demócrata socialista" Ilhan Omar ha dicho que el "cáncer" del departamento policial de Minneapolis debe ser reemplazado por "otra fuerza de seguridad". El pope progresista, Bernie Sanders, ha rechazado cualquier desfinanciamiento, manteniendo su reclamo de una mejora en los salarios policiales.

Entre quienes reclaman la abolición de la institución policial existe también una diversidad. Algunos son sólo reformadores que buscan una expresión radicalizada. Christy Lopez, profesora de Derecho citada por el sitio Vox.com, en una encuesta a distintos referentes abolicionistas, ve compatibles las reformas parciales y un planteo de abolición que "resetee la seguridad pública", porque "la policía tiene demasiadas tareas". Otra citada, Jenn Jackson, de Ciencias Políticas de la Universidad de Syracuse, rechazaba el camino de reformas policiales, mostrando que han dado lugar a un fracaso tras otro.

Las visiones más de fondo están ligadas a establecer un control directo de la seguridad de parte de las comunidades oprimidas. Esta

perspectiva tiene como precondition derrotar al Estado imperialista, que ha desarrollado este enorme aparato represivo para ejercer su autoridad dentro y fuera del país.

Frank Chapman, de la National Alliance Against Racist and Political Repression, caracteriza que hay una rebelión popular con dirección negra en el país y que "hasta que las comunidades negra y de color no controlen la policía, nos van a seguir asesinando impunemente". Otro planteo de fondo es el de Max Rameau, de Pan African Community Action, que defiende un planteo de supervisión comunitaria de las fuerzas de seguridad, diciendo que "los jóvenes están imaginando un mundo donde estas tremendas instituciones del imperialismo y el Estado policial hayan desaparecido" (ambos en el sitio Black Agenda Report).

Existe una vanguardia que está denunciando los intentos de diluir la rebelión. El proyecto bonapartista de Trump implica el desarrollo de un Estado policial. Hay que derrotarlo ahora, y no esperar a noviembre. La militarización de la sociedad es un producto del derrumbe de todo un régimen político y social en el marco de la decadencia histórica capitalista. Para derrotarla, el movimiento necesitará discutir un programa que plantee una salida para todo el desastre social y económico que se impone contra la población y una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales.

En este marco, la investigación y condena de los responsables policiales, políticos y judiciales de los miles de crímenes policiales perpetuados en el país son el punto de partida para avanzar en el debate necesario de cómo las comunidades pueden manejar su seguridad sin opresión ni violencia. Esto requiere del desmantelamiento del aparato represivo. Es urgente tomar el impulso de la rebelión para exigir la inmediata libertad de los 54 presos políticos en cautiverio hace décadas, como Mumia Abu Jamal y Leonard Peltier.

¡Viva la rebelión popular contra la potencia imperialista de Estados Unidos!

Guillermo Kane